

Puerto Antioquia: conflictos socioambientales y resistencias étnico-territoriales en Urabá, Colombia¹.

Andrés García Sánchez²

Resumen

En la región de Urabá, al noroccidente de Colombia, desde la década de 1940 la implementación de distintos proyectos económicos centrados en la agroindustria y las infraestructuras ha generado diversos impactos ecológicos, socioespaciales y políticos, especialmente en los territorios de comunidades étnicas y campesinas. En Turbo, el modelo de desarrollo hegemónico centrado en la explotación agrícola a través de extensas plantaciones de banano y plátano, la ganadería extensiva y la construcción de infraestructuras viales y portuarias, superpuesto con distintos ciclos de conflicto armado, han profundizado la desigualdad regional y afectado principalmente los medios de vida, las territorialidades y formas organizativas de las comunidades afrodescendientes, quienes han experimentado múltiples formas de violencia como desplazamiento forzado, despojo territorial, asesinatos, intimidación de liderazgos y la usurpación de la representación política de los consejos comunitarios, entre otras. Frente a los efectos devastadores del extractivismo de grandes emprendimientos económicos y la guerra, en muchos casos profundizados por la acción estatal, las comunidades y formas organizativas negras, en articulación con otros agentes sociales, han desplegado estrategias de acción colectiva y política para defender sus vidas, los territorios y la naturaleza. Desde una perspectiva de *investigación colaborativa* que articula enfoques y procedimientos etnográficos y de la cartografía social, esta ponencia reflexiona sobre los diversos efectos socioambientales de la implementación del puerto multipropósito Puerto Antioquia en el Golfo de Urabá, así como sobre las estrategias de resistencia y movilización política adelantadas por el Consejo Comunitario Los Manatíes para defender sus derechos étnico-territoriales ante los proyectos de desarrollo económico.

Palabras clave: Urabá - Colombia; Puerto Antioquia; Comunidades negras; Derechos étnico-territoriales.

¹ Los insumos etnográficos, cartográficos y las reflexiones elaboradas juntamente con activistas y organizaciones sociales que se retoman en esta ponencia derivan principalmente del proyecto de investigación “Observatorio ruralidad y paz. Prácticas, saberes y resistencias étnicas y campesinas en Oriente antioqueño y el Gran Urabá 2002 – 2022” (CODI 2022-52615), financiado por la Universidad de Antioquia y las organizaciones étnicas, campesinas y ambientales vinculadas. Con el apoyo de la Estrategia de Sostenibilidad (2024-2026) del Grupo Estudios del Territorio adscrito al Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. **Trabalho apresentado na 35ª Reunião Brasileira de Antropologia (Ano: 2026).**

² Doctor en antropología social. Profesor asociado del Instituto de Estudios Regionales, Universidad de Antioquia. Investigador Grupo de Estudios del Territorio. Correo: andres.garcia1@udea.edu.co

Introducción

La región de Urabá, en la frontera de los departamentos de Antioquia y Chocó, al noroccidente de Colombia, ha experimentado históricamente violentos procesos de colonización y explotación de la naturaleza. Distintos ciclos migratorios de grupos campesinos, pueblos indígenas, comunidades negras y otras poblaciones ribereñas se han vinculado con la ocupación de tierras y la extracción de recursos como aconteciera a inicios del siglo XX. Posteriormente, miles de víctimas tanto de la *Violencia* bipartidista en la década de 1950, como de poblaciones desterradas y despojadas por cuenta del conflicto armado interno entre guerrillas, paramilitares y fuerzas estatales en las décadas de 1980 y 1990, han arribado a la región provenientes principalmente de regiones como el Chocó, Córdoba y otras del Caribe colombiano.

Tras la construcción de la *vía al mar* que conecta a Medellín con Turbo a mediados de los cuarenta, se consolida la agroindustria centrada inicialmente en la producción de banano durante la década de 1960 y posteriormente de plátano y palma aceitera como eje central del modelo económico departamental. Durante las primeras dos décadas del siglo XXI, consolidada la infraestructura vial de las *autopistas para la prosperidad de cuarta generación*, particularmente la Autopista al Mar 2, se construye el megaproyecto Puerto Antioquia en el corregimiento Nueva Colonia de Turbo, el primero de cinco puertos que se proyectan construir durante los próximos años en Urabá.

La hegemonía del desarrollo económico centrado en el extractivismo, la explotación forestal, la agroindustria, la ganadería y las infraestructuras de transporte se ha afianzado paralelamente con la degradación del conflicto armado, desencadenando trágicamente la victimización de miles de personas, el despojo continuo y el acaparamiento de tierras, así como la afectación de ecosistemas estratégicos de bosques, ríos, manglares y selvas húmedas tropicales. En las narrativas y representaciones hegemónicas de las elites económicas y políticas de Antioquia, la región -y sus gentes- ha sido *ordenada* y recuperada del *atraso* gracias al “espíritu empresarial” (Steiner, 2019), y posteriormente, a través de distintos procesos de “pacificación” (Álvarez y Pimienta, 2022).

En Colombia, tras el cambio de la Constitución Política en 1991, las comunidades negras adquieren estatus étnico y el reconocimiento de derechos culturales y territoriales. El reconocimiento de la identidad colectiva afrodescendiente y la titulación en propiedad de

tierras ocupadas tradicionalmente se alcanzó en medio de una profunda crisis humanitaria producto del desplazamiento forzado y otras violencias que en el marco del conflicto armado de finales de los años 1990 y durante el primer lustro de los 2000, afectó de manera desproporcional a los grupos étnicos y la naturaleza (JEP, 2019). Según la Comisión de la Verdad, entre 1990 y 2016, hubo un total de 1.699 personas afrocolombianas víctimas de despojo territorial. Desde 1993, año de promulgación de la Ley 70 o “Ley de negritudes”, los pueblos negros han reclamado al estado más de 3.278.980 hectáreas de tierras despojadas por cuenta de la guerra. El destierro y otras formas de violencia han sido funcionales para estancar la implementación de los derechos étnico-territoriales y debilitar las formas organizativas (CEV, 2022, p. 359-371).

Esta palestra analiza algunos conflictos socioambientales que se registran en el distrito de Turbo tras el despliegue de proyectos económicos extractivos, la superposición de formas de violencia y la construcción de Puerto Antioquia que, en conjunto, han profundizado la desestructuración de las territorialidades, modos de vida y formas organizativas de comunidades étnicas en lo que va corrido del siglo XXI. El despliegue de dichos conflictos socioecológicos y las luchas étnicas y ambientales que les han hecho frente, dan cuenta de diversas y contrapuestas concepciones sobre el territorio, la naturaleza, el desarrollo y la construcción de paz en un contexto regional de profundas asimetrías de poder que históricamente ha confrontado a distintos agentes sociales, económicos y políticos.

Urabá: Infraestructuras del desarrollo, *geografías de la guerra* y comunidades negras

Distintos estudios han analizado las dinámicas históricas de colonización, extractivismo y acumulación de capital económico en la región de Urabá, así como de los vínculos escalares, ecológicos y socioculturales que la articulan con los vecinos departamentos de Córdoba y Chocó (Parsons, 1979; Steiner, 2019). Una extensa literatura académica también ha dado cuenta de las dinámicas violentas y bélicas de disputa, apropiación, control y explotación de la tierra y los recursos que han incorporado la región al Estado colombiano a través de una *geografía de la guerra* (García, *et al.*, 2011) que ha facilitado, de un lado, la acumulación de capital del sector extractivo y las elites regionales, y de otro, un correlato de victimización de miles de personas y devastadores impactos ambientales y territoriales, especialmente durante la segunda mitad del

siglo XX (Uribe, 1992; Aparicio, 2012).

La colisión violenta de múltiples territorialidades ha producido unas *geografías de la guerra* en Urabá. Analíticamente, las territorialidades diferenciadas (institucionales, empresariales, bélicas y socioculturales), dan cuenta de las diversas y contrapuestas concepciones, intereses y discursos sobre las formas de comprender, producir e imaginar el espacio, la región y los territorios por parte del estado, los sectores económicos, los grupos armados no estatales y la sociedad civil. Las *territorialidades institucionales* son representadas en el ordenamiento, zonificación y gestión administrativa, militar y ambiental de los municipios y la región. La *territorialidad empresarial* vincula inicialmente las tierras destinadas a la agroindustria agenciada por una institucionalidad privada sin mayor regulación estatal, y que en la actualidad se expresa de manera complementaria en las megainfraestructuras viales y portuarias. Las *territorialidades bélicas* refieren a los diferentes tipos de control, dominio y violencia ejercida por las guerrillas (principalmente EPL y FARC-EP), los paramilitares y la fuerza pública, que han terminado imponiendo órdenes socioespaciales y económicos en la región. Finalmente, las *territorialidades socioculturales* producidas históricamente en distintos momentos de colonización expresan sentidos de pertenencia por los lugares apropiados, entre las que se destacan las étnicas de pueblos indígenas y comunidades negras, así como del campesino (García *et al.*, 2011).

Como parte de las *territorialidades económicas* en la región, desde finales del siglo XIX se ha proyectado la construcción de terminales portuarias en el Golfo de Urabá como estrategia del desarrollo departamental³ (ver Figura 1). Puerto Antioquia como megaobra de infraestructura es la promesa cumplida de “salida al mar” que ha definido a Urabá en el imaginario capitalista de Antioquia y el interior del país. Su construcción estuvo liderada por Puertos Inversiones y Obras PIO SAS, con una combinación de inversores extranjeros como CMA CGM S.A (Naviera francesa), Agrícola Santa María, Agrícola El Retiro, Banacol y Uniban, en el corregimiento de Nueva Colonia de Turbo. Como terminal multipropósito cuenta con una línea de muelle de 1340 m y capacidad de movilización de 7 millones de toneladas por año (Puerto Antioquia, 2025). A pesar del reconocimiento como proyecto de inversión por el Banco Interamericano de Desarrollo, su construcción se realizó sin el debido proceso de consulta

³ En la actualidad la única terminal portuaria construida y en operación es Puerto Antioquia. Se prevé la construcción de otros cuatro puertos en el Golfo de Urabá: Progreso, Pisisí, Cirilo y Darien International Port.

previa, libre e informada de las comunidades étnicas asentadas en la denominada área de influencia (Ordoñez, 2019).

Solamente a finales de 2025, a pocos meses de iniciar la operación de Puerto Antioquia, la movilización social de activistas de distintos consejos comunitarios con el acompañamiento jurídico de instituciones aliadas y la pastoral afrocolombiana, consiguió a través de una acción de tutela que la Procuraduría General de la Nación accionara al Ministerio del Interior para que garantizara el derecho a la consulta de las comunidades negras cuya presencia histórica y territorialidades en principio no fueron reconocidas en el área de intervención del megaproyecto, ni tampoco participaron en el debate y la definición sobre la construcción y el funcionamiento de un puerto que impacta directamente en sus territorios y modos de vida. Cuando fue otorgada la licencia ambiental para la construcción y operación de Puerto Antioquia a inicios de la década del 2010, en la zona ya habían sido tituladas colectivamente las tierras de los consejos comunitarios Bocas de Atrato y Leoncito, Los Manatíes y Los Mangos (Domínguez, 2015).

Las *territorialidades socioculturales* de comunidades negras en Turbo se han forjado a través de distintos procesos de poblamiento, migraciones económicas y la movilidad forzada producto del conflicto armado y los procesos de despojo en Antioquia, Chocó, Córdoba, Bolívar y otras regiones del Caribe. El arribo de comunidades negras durante la década de 1960 a la región está directamente asociado con la instalación de empresas madereras, principalmente Maderas del Darién y Maderas del Atrato, así como con los procesos de ocupación de *tierras baldías* que años después les serían tituladas en tanto grupo étnico. Desde la década de 1970, en el corregimiento Nueva Colonia donde hoy se localiza el título colectivo del consejo comunitario Los Manatíes – y donde se construyó Puerto Antioquia-, las guerrillas (EPL y FARC) y los paramilitares se han disputado el control territorial y económico de los recursos naturales, asesinando y desplazando familias y líderes sociales para apropiarse de tierras colectivas y privadas que serían explotadas para el aprovechamiento forestal, la agroindustria bananera, la ganadería extensiva y el narcotráfico (Aristizábal, 2023).

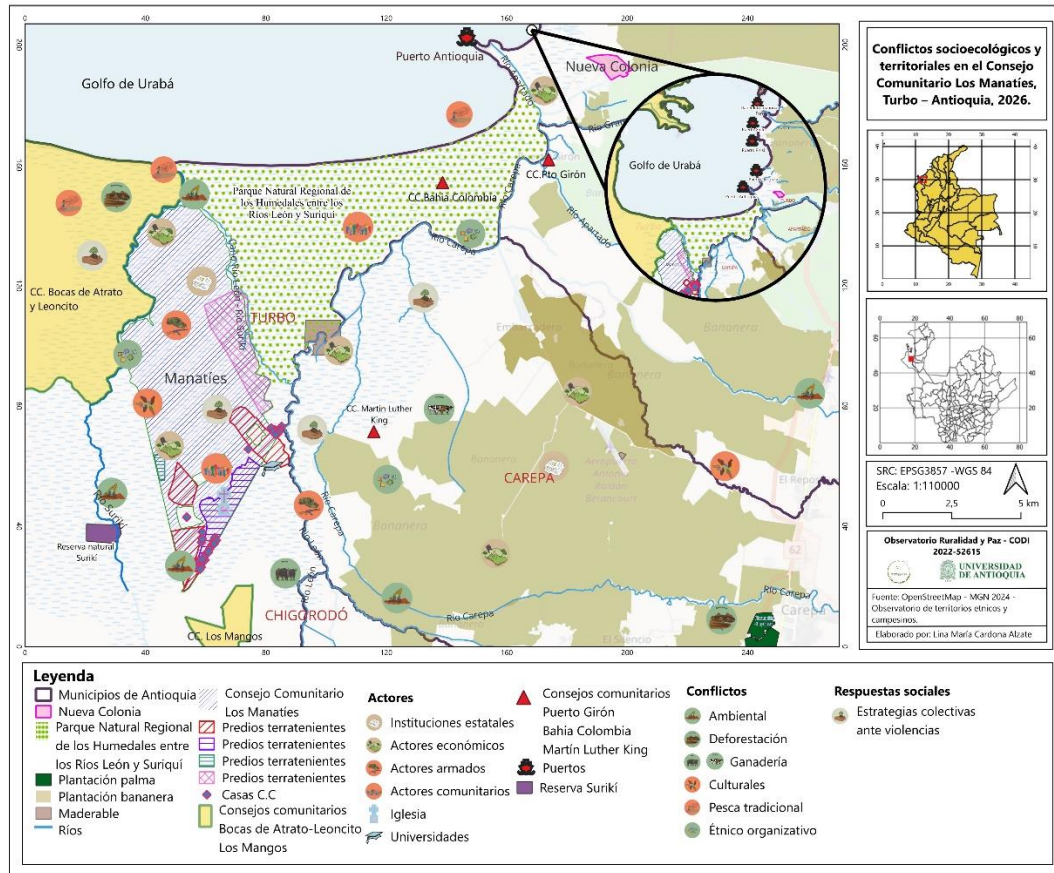


Figura 1. Mapa Conflictos socioecológicos y territoriales en el Consejo Comunitario Los Manatíes, Turbo – Antioquia. Fuente: elaboración propia, 2026.

En Antioquia, entre 1997 y 2011, el estado concedió 14 títulos colectivos en distintas regiones. En el Golfo de Urabá, Los Manatíes con una extensión de 4397 hectáreas fue titulado en el año 2000, mientras Bocas de Atrato y Leoncito y Los Mangos con una extensión 34344 y 364 hectáreas respectivamente. En la zona otros consejos comunitarios como Puerto Girón y Bahía Colombia aspiran a la titulación colectiva de tierras (Domínguez, 2015). En paralelo al reconocimiento de los derechos étnicos y la titulación de las tierras ocupadas tradicionalmente, los paramilitares de las AGC en alianza con empresarios bananeros, destierran a las comunidades negras que convertidas en víctimas del despojo han luchado por permanecer en la región. Además de los efectos de la violencia en contra de comunidades étnicas y sus formas organizativas, los procesos de despojo han impactado ambientalmente con la deforestación y la modificación hidráulica de ríos y humedales para la desecación de tierras puestas al servicio de la agroindustria, la ganadería extensiva y la economía del narcotráfico, afectando ecosistemas estratégicos y funciones ecológicas fundamentales para la regulación y almacenamiento de agua

y la provisión de hábitats de distintas especies de fauna y flora (Castañeda, Jiménez, Palencia, 2025).

Como ha evidenciado la extensa literatura elaborada por la academia, las instituciones estatales, la cooperación internacional y el movimiento social afrocolombiano, los territorios colectivos de comunidades negras, sean titulados o en proceso de titulación, durante las últimas cuatro décadas, tanto en el Caribe como en el Pacífico colombiano, han pretendido ser transformados en espacios de explotación y control por parte de distintos sectores económicos (madereros, agroindustriales, mineros, portuarios, cocaleros), incluyendo actores armados no estatales y narcotraficantes, imponiendo imaginarios y prácticas de desarrollo alejadas de las visiones propias de comunidades y formas organizativas étnicas⁴, interpretados como formas contemporáneas de “ecogenoetnocidio” que profundizan el racismo estructural y la segregación espacial que históricamente han enfrentado los afrocolombianos (Arboleda, 2019).

Las formas en que el Estado, el capital y la guerra operan en Urabá, así como en otras regiones del país, producen espacialidades económicas y del destierro que transforman las territorialidades socioculturales étnicas y campesinas, impactando en las prácticas culturales y formas organizativas comunitarias, reordenando sus formas productivas y los intercambios económicos tradicionales (Ulloa y Coronado, 2016), dificultando además la identificación y proyección de otras posibles prácticas y representaciones asociadas con *economías de la diferencia*, como han postulado Gibson-Graham (2006).

Los conflictos socioambientales que se han presentado durante las últimas cuatro décadas en Urabá y el municipio de Turbo, han confrontado a sectores económicos hegemónicos, las políticas ambientales y de ordenamiento territorial del Estado, los grupos armados no estatales y a sectores campesinos y étnicos marginalizados de los beneficios económicos y sociales derivados de la explotación de recursos y el desarrollo. Retomando los planteamientos que desde la ecología política han realizado, entre otros, Martínez-Alier (2005) y Svampa (2013), en esta palestra comprendo por conflictos socioambientales aquellos vinculados con el acceso y control de los territorios y los bienes naturales que implican, para los distintos agentes sociales en confrontación, intereses, significados y valoraciones divergentes y contrapuestos en torno a lo que se comprende e imagina como desarrollo, naturaleza, territorio, bienestar y construcción

⁴ Entre otros, ver los trabajos de Rosero 2002; Escobar 2005; Oslender 2006; Corte Constitucional de Colombia, Auto 005 de 2009; CEV, 2022.

de paz.

No obstante, es importante destacar que particularmente desde finales de los años 1990, en medio de las múltiples violencias estructurales, bélicas y desterritorializantes del desarrollo en Urabá, han emergido importantes movimientos sociales que han desplegado una serie de respuestas colectivas y territoriales en la región, particularmente el movimiento de comunidades negras y de *víctimas* del conflicto armado quienes han articulado significativas estrategias de resistencia e iniciativas de construcción de paz territorial y ambiental (García *et al.*, 2011, p. 415-473), que pueden ser interpretados, siguiendo a Escobar (2005), como *estrategias subalternas de localización*, que imaginan la región como espacio de vida y de alternativas económicas a través de proyectos de reparación y cuidado tanto de las vidas humanas como de formas de vida más-que-humanas. La articulación de distintos procesos organizativos ha consolidado un conjunto de estrategias políticas y jurídicas efectivas para la defensa de las identidades colectivas y sus territorios, la búsqueda de una vida digna y la construcción de paz entre humanos y con la naturaleza, como en el caso del Consejo Comunitario Los Manatíes, la Reserva Natural Surikí y el Centro de pastoral afrocolombiano Urabá Darién.

Observatorio ruralidad y paz. Apuntes sobre *producción colaborativa* de conocimiento

Los procesos de investigación y producción de conocimiento sobre los que reflexionamos han procurado consolidar “relaciones sociales de investigación” (Bourdieu, 1999) con organizaciones colectivas y comunidades locales -entre otros actores institucionales- que adelantan diversas luchas por la defensa de sus modos de vida, procesos diferenciados de territorialización y que promueven la construcción de paz entre humanos, así como con otras formas de vida más-que-humana. Tratar de comprender la superposición histórica de múltiples formas de violencia estructural, bélica y epistémica que se despliegan sobre gentes, procesos organizativos y espacios en la región fronteriza de Urabá, así como atender los cuestionamientos de activistas y líderes comunitarios frente a las maneras jerárquicas de intervención y producción de conocimiento que reproduce la academia y que interpretan como otra forma de *extractivismo*, ha implicado poner a prueba horizontes alternativos de colaboración articulando corrientes de pensamiento y acción intelectual crítica, principalmente latinoamericanas. Esta

labor crítica de imaginación y práctica de otros posibles y necesarios vínculos entre la universidad y la sociedad se inspira en algunos principios, problematizaciones y consideraciones ético-políticas de la investigación acción participativa - IAP, especialmente del trabajo sociológico temprano de Fals Borda ([1957] 2017) y sus elaboraciones posteriores (1979), el pensamiento decolonial (Escobar, 2010), perspectivas antropológicas (Almeida, 2013) y feministas (Flórez y Olarte, 2020), que interrogan y promueven la praxis investigativa y la producción de conocimiento *con* movimientos sociales.

En el marco del proyecto de investigación Observatorio ruralidad y paz nos ha interesado desarrollar algunos principios de acción y diálogo interdisciplinar, especialmente el despliegue contextualizado de metodologías que articulan trabajo de campo etnográfico, cartografía social y recorridos territoriales; procesos de cualificación de líderes y espacios de intercambio de conocimientos a través de diplomados y talleres; elaboración experimental de diversos productos de comunicación para la divulgación del conocimiento entre distintos públicos; y en menor medida, la coautoría de textos entre docentes y activistas sociales. El sentido procesual y situado de nuestra praxis investigativa ha buscado inscribir el *diálogo de saberes* y las distintas modalidades de participación de los agentes sociales en un horizonte temporal de mediano plazo, procurando trascender las intervenciones de ciclo corto derivadas de las limitaciones de financiación para la investigación en ciencias sociales orientada a los temas de conflictos socioterritoriales, violación de derechos étnicos y geografías de paz.

Procedimentalmente, adoptamos una posición crítica que rehúye el despliegue de diseños metodológicos y herramientas estandarizadas que pretenden estabilizar la diversidad epistémica, social y territorial de los activistas y la heterogeneidad de sus formas organizativas, quienes a pesar de la multiplicidad de violencias que experimentan, despliegan complejos procesos de conciencia colectiva y construyen interpretaciones y conocimientos propios que desafían las formas clasificatorias e identitarias estatales y de otras intervenciones (Almeida, 2011), y que expresan adecuadamente la “insurrección de saberes sometidos y descalificados”, que destacara Foucault (1976).

De manera provisoria, por *producción colaborativa* de conocimiento entendemos el tipo de trabajo conjunto que desplegamos con activistas y movimientos sociales que busca explícitamente propiciar condiciones de posibilidad para la mediación de intereses y significados que, en medio de la diversidad y posibles ambigüedades y antagonismos entre las

perspectivas en diálogo, posibilita espacios para el intercambio, aprendizaje y enseñanza orientados por el propósito común de comprender las realidades y contribuir con la transformación de condiciones de injusticia social e inequidad territorial.

Resistencias étnico-territoriales ante megaproyectos de desarrollo en Urabá: Consejo Comunitario Los Manatíes.

Las comunidades negras del Consejo Comunitario Los Manatíes, localizado entre las partes bajas de los ríos León y Suriquí, han desarrollado tradicionalmente mecanismos de adaptación a las condiciones del complejo de humedales que integra distintas ciénagas, caños, playones y bosques inundables a través de prácticas familiares y colectivas de aprovechamiento de recursos como la pesca artesanal, la caza, la recolección de productos del bosque y la agricultura estacional, principalmente de plátano, arroz y yuca para la subsistencia diaria. Por su cercanía al Golfo de Urabá, el intercambio de aguas dulces y salobres configura la biodiversidad que caracteriza la región, y en la cual se sustenta una identidad colectiva *anfibia* asociada con la geografía y los regímenes anuales de inundación y las épocas de sequía (Castañeda, Jiménez, Palencia, 2025, p. 30-32).

Al momento de la titulación colectiva de Los Manatíes durante el 2000, la comunidad estaba conformada por 152 personas organizadas en 28 familias, mientras que para 2007 se reportaban 127 personas, y para 2025 se registran en un censo comunitario solo 105 personas habitando en las tierras colectivas (Castañeda, Jiménez, Palencia, 2025, p. 30-32). En la actualidad, ante los procesos de desplazamiento forzado, despojo territorial y amenazas en contra de distintos líderes que han tenido que huir por la presión de los paramilitares y empresarios interesados en la explotación de las tierras, los líderes representantes del consejo comunitario adelantan los procesos de reclamación de derechos a la reparación colectiva por el conflicto y el retorno de familias con la Unidad para las Víctimas de Urabá.

El consejo Los Manatíes, hacia el suroccidente, sostiene vínculos de vecindad con la Reserva Natural Surikí, un área protegida de la sociedad civil de 487 hectáreas, gestionada por la familia Jiménez, que tras retornar a las tierras que le habían sido despojadas por los paramilitares del Bloque Bananero durante la década de 1990, transforman la vocación extractivista familiar en un proyecto de conservación y restauración de los bosques a través del

turismo regenerativo, la ganadería agrosilvopastoril, la agricultura sustentable y la construcción de paz con la naturaleza. Durante los últimos años, los líderes de Los Manatíes y la Reserva Surikí quienes comparten los efectos sociales y espaciales del proceso de despojo económico y la violencia paramilitar, con el apoyo de la pastoral afrocolombiana y otras instituciones, se han articulado para denunciar ante las autoridades ambientales competentes la creación de nuevas intervenciones hidráulicas por parte de empresarios de la agroindustria y la ganadería en sus tierras, así como para desplegar procesos de fortalecimiento social, la recuperación de la autonomía organizativa y procesos jurídicos para la restitución de las tierras ocupadas por terceros que, en conjunto, pueden ser interpretados como formas de resistencia territorial que reconfiguran identidades colectivas a partir de la solidaridad, el cuidado mutuo y las relaciones interculturales.

Según (Castañeda, Jiménez, Palencia, 2025, p. 74-78), los procesos de despojo de tierras y las intervenciones hidráulicas adelantadas por empresarios se remontan hasta la década de 1970 y se prolonga hasta inicios de la década de 1990, caracterizados por el predominio de la extracción maderera que afectó los medios de vida de la comunidad negra que se vio subordinada a los intereses empresariales. Posteriormente, tras la retirada de las empresas madereras, particularmente por los novedosos derechos étnicos y la titulación colectiva de las tierras que iniciaba en la región, las tierras quedan en poder de ganaderos, nuevos colonos y estructuras paramilitares que consolidan otra fase de intervenciones territoriales e hidráulicas, principalmente para ampliar los cultivos de plátano y la ganadería extensiva, profundizando las transformaciones en el paisaje y el deterioro ambiental de manera paralela con el asesinato de líderes y el desplazamiento forzado de integrantes de la comunidad.

Entre 2010 y el 2025 se profundizan los efectos sociales, territoriales, ambientales y políticos de la superposición de violencias y el extractivismo en las tierras colectivas. Tras el desplazamiento forzado de las familias, los terceros foráneos ocupantes del territorio adelantan procesos de compra y venta de predios bajo la coacción de los paramilitares. Las familias que resistieron permaneciendo en sus tierras, fueron confinadas al interior del título colectivo, viendo reducida su movilidad y el aprovechamiento de las tierras a solo tres sectores, como muestra la figura 1. En el plano de la representación política, para el 2015, los terratenientes promueven un proceso de elección de la nueva junta directiva del consejo comunitario, imponiendo personas en la estructura organizativa, monopolizando la información comunitaria

y controlando el relacionamiento con instituciones externas y la ejecución de proyectos que deberían beneficiar a la comunidad del consejo. Entre 2015 y 2020, el consejo comunitario cambia en cuatro ocasiones de representantes, y aunque entre los cargos oficiales se contaba con personas pertenecientes a la comunidad coaccionada, el control fáctico de las decisiones lo tomaban personas externas, profundizando el despojo y la pérdida de autonomía étnico-territorial (Castañeda, Jiménez, Palencia, 2025, p. 74-78; Comunicación personal con integrantes de la junta directiva del consejo comunitario, 2025).

Los efectos ambientales de estos procesos económicos han repercutido notablemente en la economía y calidad de vida de las familias, en tanto que los medios de subsistencia prácticamente han desaparecido y las transformaciones hidráulicas no solo han aumentado el costo de la movilidad en el título colectivo, sino que se ha presentado sobrecostos en otros productos de la dieta básica arriesgando la seguridad alimentaria. El aumento en los costos de vida también se ha presentado en el corregimiento por cuenta del arribo de población flotante atraída por la construcción y expectativa portuaria, lo que ha incrementado los precios de todos los productos e insumos en la región. Tras el desplazamiento y despojo también los conocimientos locales asociados a la partería, la medicina ancestral, el aprovechamiento de ciertas condiciones del bosque según los regímenes de lluvia e inundaciones, la fabricación de artesanías y otras herramientas de trabajo se han visto afectados (Diario de campo y entrevistas, 2025-2026).

Durante los últimos dos años, asociado con el trabajo articulado y solidario que vienen realizando con la Reserva Surikí, otros consejos comunitarios vecinos, la Corporación Centro de Pastoral Afrocolombiana, entre otras instituciones y funcionarios públicos, paulatinamente se adelanta la recuperación política de la Junta Directiva del consejo comunitario por parte de un grupo de jóvenes líderes y lideresas, quienes no solamente han retomado el control de las estructuras oficiales del gobierno étnico y territorial, sino que han conseguido gestionar distintas iniciativas de reclamación de derechos para su comunidad, así como el acceso a programas y proyectos en su beneficio con el gobierno local y nacional. Además del avance en los procesos jurídicos y técnicos para la consulta con Puerto Antioquia (avanzando simultáneamente en el diálogo con los representantes de Puerto Progreso), con la Unidad para las Víctimas han retomado los procesos de reparación colectiva y para el retorno de familias desplazadas, así como adelantando actividades para el rescate de prácticas culturales y económicas tradicionales

y la formulación de propuestas de restauración de ecosistemas.

Este proceso ha implicado la formación por parte de los liderazgos juveniles, la apropiación de conceptos y herramientas jurídicas para ejercer la representación de sus comunidades, participar en espacios de planeación municipal y ejercer la representación de manera decidida para la garantía de sus derechos colectivos, luchando también contra el estigma de corrupción que signa a los consejos comunitarios entre los funcionarios públicos, representantes de las empresas privadas, entre otros sectores sociales, como formas organizativas corruptas que buscan el beneficio personal o familiar de unos cuantos. La resistencia y transparencia en el ejercicio del liderazgo de la nueva junta directiva y representación legal, ha movilizó a funcionarios de distintas entidades públicas que, conociendo la realidad de los consejos comunitarios y las afectaciones que han sufrido por cuenta de los megaproyectos, han actuado como aliados para proporcionar información oportuna y rutas de actuación para avanzar en la garantía de sus derechos.

En el contexto regional de superposición de formas violentas de despojo, estas acciones locales van sedimentando estrategias de convergencia de luchas sociales y resistencias localizadas tejidas a través de vínculos solidarios frente a situaciones de conflicto y políticas gubernamentales, en este caso referidas a la construcción de megaproyectos de infraestructura portuaria, así como por la no participación de las comunidades locales y los consejos comunitarios en los escenarios de diálogo y concertación de los proyectos de desarrollo, permiten unificar circunstancialmente acciones políticas y su objetivación en movimientos sociales heterogéneos de carácter étnicos y ambientales, con la participación de víctimas y sectores religiosos (Almeida, 2013).

Aunque estas expresiones de resistencia y movilización social están dialécticamente articuladas con las formas de dominación y control que se actualizan en el tiempo y el espacio en la región, principalmente por cuenta del paramilitarismo, las acciones colectivas logran generar ciertas oportunidades en favor de las aspiraciones del movimiento étnico y ambiental, así sea de forma parcial. Es necesario advertir que en un contexto tan complejo y violento las formas de movilización y el reclamo de autonomía étnica no están exentos de contradicciones y limitaciones internas, que se profundizan por la cooptación que se ciernen sobre liderazgos.

Ante las *geografías de la guerra*, el extractivismo y la falta de protección de los derechos étnicos por parte del estado y sus instituciones, las comunidades étnicas y las víctimas del

conflicto armado representadas por el Consejo Comunitario Los Manatíes en articulación con la Reserva Surikí, entre otras organizaciones aliadas en distintas escalas, vienen consolidando formas de acción colectiva que pueden comprenderse como expresión de *territorialidades* y *epistemologías de paz* en la región, que articulan un conjunto conocimientos, experiencias, prácticas y una red de relaciones que vinculan las organizaciones sociales con diversos seres, cuerpos de agua, bosques y animales que conforman un mundo más-que-humano en Urabá.

Apuntes finales

Los relatos de los líderes del consejo comunitario Los Manatíes dan cuenta de una memoria de múltiples violencias que se reproducen como parte del racismo estructural y las formas coloniales de producción espacial y económica que hoy se actualizan a través de procesos violentos y algunos más sutiles de despojo y negación de su existencia, territorialidades y formas culturales. A pesar de la continuidad de las violencias en contra de sus cuerpos, espacios, subjetividades, formas organizativas y sistemas de conocimiento en Urabá, como en otras regiones del país, las comunidades negras han hecho parte activa y de manera propositiva de los procesos de paz en el marco de las distintas negociaciones adelantadas por el Estado con grupos insurgentes y paramilitares, procurando restablecer las formas de convivencia no violenta en sus territorios y la autonomía política, enunciando otras verdades posibles sobre la organización y representación política y el desarrollo, con la intención de subvertir además las lógicas de exclusión que históricamente les han afectado.

Las luchas étnico-territoriales y ambientales que se despliegan actualmente en Urabá articulan con conjunto de saberes interculturales, prácticas territoriales y relaciones de solidaridad que como acción política configuran posibilidades de paz frente a la desterritorialización y violencias asociadas, señalando los daños experimentados y las transformaciones locales y regionales acontecidas tras la guerra y por cuenta de los proyectos económicos extractivos. El análisis de las situaciones de violencia y las respuestas sociales agenciadas por los líderes y organizaciones aliadas en Turbo, plantean procesos de recuperación de la autonomía, iniciativas de restauración ecológica y uso sustentable de la naturaleza, y procesos de reconciliación que pueden ser interpretados como expresiones de *geografías de paz* en construcción en diferentes escalas, que pretenden restituir los procesos de gobernanza étnica

ante mecanismos de gobernanza criminal y armada despegados por actores armados no estatales en alianza con sectores empresariales.

Bibliografía

ALMEIDA, A. W. B. A. de. Nova cartografia social: territorialidades específicas e politização da consciência das fronteiras. En: Almeida y Almeida (Orgs). Povos e comunidades tradicionais. Nova cartografia social. Manaus, 2013.

ÁLVAREZ, E., & PIMIENTA, A. La “pacificación” y la “paz territorial” en Urabá como lógicas espaciales de la paz. *Bitácora Urbano Territorial*, 32(1). 2022.

APARICIO, J. Rumores, residuos y Estado en “la mejor esquina de Sudamérica”. Una cartografía de lo “humanitario” en Colombia. Bogotá: Universidad de los Andes. 2012.

ARBOLEDA, S. Rutas para perfilar el ecogenoetnocidio afrocolombiano: hacia una conceptualización desde la justicia histórica. *Nómadas*, 50, 2019. <https://doi.org/10.30578/>

ARISTIZÁBAL, A. Tierra y vida: Re-territorializaciones de la violencia y la paz en el corregimiento de Nueva Colonia, Distrito de Turbo [Tesis de maestría, Universidad de Antioquia]. 2023.

BOURDIEU, P. Comprender. En: La miseria del mundo. (pp. 527-543). Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica, 1999.

GIBSON-GRAHAM, J. K. A Postcapitalist Politics. University of Minnesota Press. 111 Third Avenue South, Suite 290 Minneapolis, MN 55401-2520. 2006.

CASTAÑEDA, J. JIMÉNEZ, E. Y PALENCIA, K. “Gestión comunitaria del riesgo en territorios colectivos anfibios Consejo Comunitario Los Manatíes” Tesis Maestría en Procesos Urbanos y Ambientales. Director Juan Carlos Guzmán. Universidad Eafit. Medellín. 2025.

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición - CEV. Resistir no es aguantar. Violencias y daños contra los pueblos étnicos [Informe Final]. 2022.

DOMÍNGUEZ, M. I. Comunidades negras rurales de Antioquia: Discursos de ancestralidad, titulación colectiva y procesos de “aprendizaje” del Estado. *Estudios Políticos*, (46), 101–123. 2015.

ESCOBAR, A. La cultura habita en lugares: Reflexiones sobre el globalismo y las estrategias subalternas de localización. En Más allá del Tercer Mundo:

Globalización y diferencia. Instituto Colombiano de Antropología e Historia. 2005.

FALS BORDA, O. Historia doble de la Costa. Universidad Nacional de Colombia; Banco de la República; El Áncora Editores. 1979.

FLOREZ, M.J. & OLARTE, M.C. Por una política de lo Turbio: prácticas de investigación feministas. En López-Jiménez C.A. (Ed.) Investigar a la intemperie. Editorial Pontificia Universidad Javeriana. 2020.

FOUCAULT, M. Defender la sociedad. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, [1976] 2000.

GARCÍA, C. I., ARAMBURO, C., BARAJAS, D., VALDERRAMA, D., & ESPINOSA, N. Geografías de la guerra, el poder y la resistencia. Oriente y Urabá antioqueño 1990-2008. Instituto de Estudios Regionales y Cinep-Odecofi. 2011.

JEP. Junio 24 2019. Comunicado 009. Unidad de investigación y acusación de la JEP, “reconoce como víctima silenciosa el medio ambiente” Justicia Especial Para la Paz, boletín de prensa No. 2, Colombia. 2019.

MARTÍNEZ-ALIER, J. El ecologismo de los pobres: conflictos ambientales y lenguajes de valoración. Barcelona: Icaria, 2005.

ORDÓÑEZ, F. Derechos étnicos y desarrollo portuario: Estudio de caso del Consejo Comunitario de Puerto Girón y el proyecto Puerto Antioquia. Fundación Heinrich Böll. 2019.

PARSONS, J. Urabá, salida de Antioquia al mar: Geografía e historia de la colonización. CORPOURABÁ. 1979

PUERTO ANTIOQUIA. Somos una terminal multipropósito ubicada en el costado sur oriental del Golfo de Urabá [Página web]. Recuperado el 3 de abril de 2026, de <https://puertoantioquia.com.co/es/about#sobre-nosotros>

STEINER, C. Imaginación y poder: El encuentro del interior con la costa en Urabá, 1900-1960 (2ª ed.). Editorial Universidad de Antioquia y Universidad de los Andes. 2019.

SVAMPA, M. Consenso de los Commodities y lenguajes de valoración en América Latina. En: Nueva Sociedad, No. 244, p. 30-46, 2013.

ULLOA, A. & CORONADO S. Extractivismos y posconflicto en Colombia: retos para la paz territorial. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia y CINEP/Programa por la Paz. 2016.

URIBE, M. T. Urabá: ¿Región o territorio? Un análisis en el contexto de la política, la historia y la etnicidad (2ª ed.). Universidad de Antioquia. 1992.